

Gonzalo Vial Correa

*SALVADOR ALLENDE. EL FRACASO DE UNA ILUSIÓN*

Santiago. Universidad Finis Terrae, Centro de Estudios Bicentenario, 2005, 165 págs.

(Recibido: noviembre 2005 Aceptado diciembre 2005)

La revisión y el estudio de la historia reciente chilena generan todavía, por diversas razones, malestar en grupos académicos, políticos, intelectuales y parlamentarios, quienes, por uno u otro motivo, continúan reticentes a que se realicen análisis históricos sobre la Unidad Popular. Más aún cuando el autor es un connotado historiador de “talante conservador” (al decir de Álvaro Góngora Escobedo, autor del prólogo del libro *Salvador Allende. El fracaso de una ilusión*), que realizó una decidida oposición al gobierno de Salvador Allende en la revista *Qué Pasa* y que trabajó como Ministro de Educación durante el régimen militar de Augusto Pinochet. De todas formas, el abogado y profesor Gonzalo Vial Correa, como es habitual en él, especialmente a través de sus crónicas periodísticas publicadas en el periódico *La Segunda*, no tiene reparos en afirmar aspectos que para muchas personas pueden resultar incómodas, y hasta parece que fueran anacrónicas, pero que por la dureza y la manera frontal que tiene para manifestar sus ideas, incluso para quienes se declaran ser políticamente de derecha, no constituyen la opinión generalizada entre las personas. No será la excepción en esta oportunidad, menos aún cuando analiza una temática histórica que todavía divide a la sociedad chilena.

La principal motivación del autor para estudiar este dicotómico período de la historia reciente de Chile es la necesidad de responder a una pregunta que desde hace décadas persiste entre los chilenos y que podríamos formular de la siguiente manera: ¿cuáles son los factores que explican la crisis que afectó a Chile durante la segunda mitad del siglo XX? Las explicaciones de Vial para comprender el colapso de la Unidad Popular y el término de la vía chilena al socialismo provienen de situaciones de más largo alcance, que tienen su explicación en procesos históricos de profunda raigambre social, política y cultural, y revela a su vez el que la sociedad chilena desde 1950 haya estado dividida en tres tercios irreconciliables, antagónicos, opuestos.

Por cierto, también existieron hechos coyunturales determinados que incidieron significativamente en el rumbo que adquirió el gobierno de Allende, aspectos que se encargará de revisar, como la personalidad de Allende, su entorno familiar, formación ideológica y trayectoria como ministro y parlamentario durante 40 años, que permiten comprender el desarrollo de su carrera política desde mediados de la década de 1930. Posteriormente, aborda con prolijidad las medidas sociales, políticas y culturales aplicadas durante su gobierno, que, para Vial, responden a una falta de organización y, además, a una carencia de un plan estratégico solvente, acorde a la magnitud de las transformaciones que se pretendían instaurar. Lo anterior permitirá comprender la falta de orientación que tuvo su administración, situación que se acentuó por la división al interior de la Unidad Popular en dos fracciones. Pese a que aspiraban realizar un proyecto similar, instaurar una sociedad socialista con bases democráticas y constitucionalistas, los mecanismos para lograrlo diferían notablemente. Mientras los socialistas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que luego se denominó el sector “guevarista”, adoptaron como forma de lucha la vía armada y violenta, los comunistas y otros sectores moderados privilegiaron, en cambio, los mecanismos pacíficos y graduales, más apegados a la línea soviética que a las doctrinas

revolucionarias propugnadas por Ernesto “Che” Guevara. Ello explicaría que, en definitiva, sumado a la intransigencia de la totalidad del espectro político y la consiguiente polarización de la sociedad chilena, al interior de la Unidad Popular coexistieran dos grupos antagónicos, donde el sector violentista obstaculizaba cualquiera solución o forma de acercamiento posible para garantizar una salida pacífica, legal, programada, a la crisis institucional.

En primer lugar, Vial destaca algunas cualidades personales de Allende aparejadas con su capacidad de trabajo, la perseverancia y la coherencia de sus convicciones ideológicas, el permanente afán de lucha social, la preocupación por los pobres que heredó de su abuelo y del padre, y un persistente interés por el servicio público, entre otros aspectos. Destaca asimismo la capacidad de “muñequero” de Allende, cualidad de carácter permanente que durante innumerables ocasiones le permitió sortear adecuadamente dificultades, pero que en otras oportunidades cayó sobre él como una maldición, perjudicándolo en muchas ocasiones. Entre los defectos del político socialista, algunos de los cuales se acrecentaron durante su presidencia, pese a su habilidad personal, Vial destaca la falta de capacidad para imponer su autoridad legitimada por una dilatada trayectoria política y, lo más importante, sustentada por votación democrática mayoritaria. Pese a ello, dice Vial, Allende “aceptó ser la voz y no la voluntad de una agrupación partidista” (p. 49), hipotecando de esta manera su poder político y estratégico para mantener equilibrada la balanza de intereses al interior de la Unidad Popular.

A continuación, el autor analiza la naturaleza, programa y estrategia de la Unidad Popular, con el objetivo de detectar y exponer cuáles fueron algunos de los lineamientos ideológicos y políticos que originaron el conglomerado político de izquierda durante la segunda mitad del siglo XX que tuvo su antecedente más directo en el Frente de Acción Popular (FRAP). La Revolución Cubana determinó el curso ideológico de la totalidad de la izquierda de América Latina, y Chile no fue la excepción, menos aún cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista difirieron en más aspectos de aquellos que los unían, pese a compartir una aspiración reivindicativa común. El análisis de este hecho permitirá además comprender el perfil revolucionario que fue adquiriendo la Unidad Popular, considerando la posición de los “guevaristas”, que auspiciaban el uso de las armas como medio de lucha, y por otro lado, los moderados, entre ellos el propio Allende, que, inversamente, defendieron la vía chilena al socialismo mediante un proceso gradual, usando los medios legales propios de la sociedad burguesa. ¿Revolución desde arriba o revolución desde abajo? Esta fue la principal disyuntiva que tuvo que afrontar el Presidente de la República, y que finalmente se transformó en la “piedra de tope” de su gobierno, puesto que dividía a quienes lo proclamaron como Primer Mandatario, pero disientían en cómo éste debía llevar adelante su programa de gobierno: si, por un lado, acelerar el proceso socialista o, por el contrario, reformar gradualmente a la sociedad, que era la pretensión inicial de Allende, la misma por la cual había luchado democráticamente, como parlamentario, ministro y ahora como Presidente de Chile. Por diversos motivos, éste no pudo realizar su anhelado proyecto político, el cual, decíamos, se truncó por la misma persistencia de concretar la utopía socialista en un breve plazo.

Asimismo, para conseguir su cuarta candidatura presidencial consecutiva, Allende tuvo que ceder parte de su programa político para convencer a socialistas y comunistas y así establecer un pacto político al interior de la Unidad Popular. En estricto rigor, esta disyuntiva ideológica generó, según se desprende de la lectura del libro, que Allende estuviera amarrado irremediabilmente a las decisiones del Comité Central de la Unidad

Popular, formado por miembros del MAPU, de la Acción Popular Independiente (API) y de los partidos Socialista, Comunista y Radical. En consecuencia, Allende carecía de capacidad de decisión, y menos todavía podía influir en los círculos políticos y económicos; éste era, en definitiva, el coordinador general o administrador del país, y no el Presidente de la República, entendiéndose por ello a un gobernante que se sustrae a los intereses de partidos políticos o de determinados grupos de presión, pensando en el bienestar de la totalidad del país y no en una fracción de amigos o compañeros. Además se presentaron dos problemas decisivos. El primero de ellos se refiere a la existencia de favoritismos para la repartición de cargos administrativos del Estado, que finalmente se transformó en una instancia de aprovechamiento político y beneficios personales. Otro elemento presente en gran parte de las temáticas analizadas por Vial es la participación del MIR en los acontecimientos ocurridos entre 1970 y 1973, específicamente la desconfianza y el descrédito que tuvo este grupo rebelde con Allende y la Unidad Popular. De acuerdo con Vial, estos grupos fueron los causantes, en gran medida, del colapso del sistema político y económico del país y, por consiguiente, de la agudización de la crisis general que afectaba a Chile desde inicios del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.

El programa de la Unidad Popular contempló como uno de sus objetivos centrales la profunda modificación de dos áreas esenciales de la sociedad: la económica y la política. En cuanto a la primera, proponía realizar una extensa estatización en la economía productiva del país (que formaría parte del área social), especialmente en la minería del cobre, considerada, según Vial, como “escandalosa” por la manera cómo se realizó la requisición de fábricas y empresas, y en la agricultura, ya que ambas disponían de instrumentos legales que respaldaban la acción emprendida por el Estado, los llamados “resquicios legales”, utilizando leyes dictadas durante la República Socialista de Carlos Dávila en 1932. No son las únicas, por cierto, pues además la colectivización de la Unidad Popular incluía al sector bancario y transporte, entre los más importantes. Referente al tema político, en cambio, pretendía reemplazar el sistema bicameral del Congreso Nacional por una Asamblea del Pueblo, aspirando de esta manera a la democratización representativa de los ciudadanos. Estos cambios se pretendieron realizar, y aquí radica uno de los aspectos más singulares del proceso socialista chileno, respetando la legalidad y las libertades públicas de la Constitución, prescindiendo de la violencia y el uso de las armas. Estos asuntos se transformarían, con el correr de los hechos, en un dilema infranqueable para Allende y su gobierno, con las consiguientes disyuntivas y contradicciones que suponía respaldar, en primera instancia, la legalidad institucional para después lidiar con grupos subversivos o terroristas que actuaban al margen de la Unidad Popular, pero, eso sí, manteniendo algún tipo de lazo con ella, ya sea en forma solapada o abierta.

Sobre la estrategia de la Unidad Popular, Vial enfatiza el carácter “invisible” de ésta, a pesar de ser explícita y manifiesta, aunque no estuviera reglamentada. Al carecer de mayoría política en el Parlamento, Allende debió recurrir a la Democracia Cristiana, pero allí se encontró con una muralla, pues este partido no estaba dispuesto a apoyar a Allende, sacrificando beneficios políticos que afectarían a su propia representatividad, cautiva e incondicional. Ninguno de ellos transaría para generar una mayoría que permitiera establecer un consenso, y así evitar la debacle del sistema político-jurídico nacional. Tres razones justifican esta decisión: imposibilidad de transacción, ya que ambas respondían a planificaciones globales disímiles e irreconciliables; reticencia de los demócratas-cristianos a cogobernar con la Unidad Popular por discrepancias esenciales, y, por último, la permanente rivalidad que existía entre ambos sectores en organismos y sindicatos

populares de base, que, a fin de cuentas, era la población que había elegido a Allende y que continuaba respaldándolo. La imposibilidad de disponer de esta ayuda alentó a la Unidad Popular a recurrir a una nueva estrategia si pretendía establecer la vía chilena al socialismo que, a estas alturas, se encontraba en graves problemas y con el endurecimiento de la oposición que dificultaba aún más el funcionamiento político de su gobierno. Aquí es donde entran a operar nuevos mecanismos ideológicos que acrecentaron la polarización entre la sociedad civil, especialmente, en las fracciones políticas que se alejaron de los mecanismos legales y pacíficos. Este nuevo plan estratégico involucró la aceleración de las estatizaciones y la creación de una euforia de bienestar económica en sectores populares, acrecentada con la creación de una Política de Alimentación y Nutrición (PAN) que comprendió el abastecimiento gratuito y garantizado de leche, pan y la canasta popular. Una vez puestas en marcha estas medidas, se procedería a materializar la estrategia política, que consistía en aprobar a través de un plebiscito, pese a la oposición del Congreso, las reformas constitucionales que creaban la Asamblea del Pueblo, favoreciendo de esta manera la radicalización del proceso revolucionario socialista de la lucha armada, y que, de acuerdo a Vial, corresponde a un “plan secreto”, clandestino, del conglomerado político de la izquierda chilena.

El clima eufórico y de desbordado optimismo que provocaron las elecciones municipales de 1971 se disiparía prontamente, dando paso a un descontento generalizado, el cual tuvo su expresión más visible en el paro de octubre de 1972, realizado en su mayoría por camioneros y comerciantes minoristas contrarios a las determinaciones económicas del régimen de Allende. Esta masiva movilización significó, para Vial, técnicamente el final del programa político, social y económico de la Unidad Popular. Desde ese momento, la situación cambiaría drásticamente, impulsada por varios hechos que alterarían el inestable y frágil cuadro de la política nacional. La oposición, representada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, en un hecho prácticamente impensable hasta ese momento, aunque manteniendo algunas reservas, y limitando el accionar de su “socio” en ciertas áreas estratégicas, se agrupa con el objetivo de conformar una alianza estratégica. Los principios ideológicos-doctrinarios que antiguamente los separaban, ahora los unían. Se produjo además un progresivo aumento de la violencia política, alentada por la doctrina violentista propiciada por sectores insurgentes fuera de la legalidad, como el MIR, y también por el Partido Socialista y la fracción MAPU liderada por Manuel Antonio Garretón. La violencia mirista y la contraviolencia perpetrada por *Patria y Libertad* son, para Vial, hechos condenables y repudiables, que manifiestan el extremo grado de odio y violencia al que llegó la sociedad chilena de entonces, la cual no aceptaba la convivencia en un mismo territorio de lucha social de ideologías antagónicas e irreconciliables.

La oscilación y el acomodo de Allende, a su vez, explican las incongruencias y contradicciones de su gobierno, originando por consiguiente un creciente rechazo de la sociedad civil y militar. Una vez más, Allende oscilaba entre el apego a las normas legales, que respondía al espíritu democrático característico en él, y su inclinación por la cada vez más creciente avidez revolucionaria. En definitiva, Allende se debatía entre asegurar la democracia representativa que se proponía instaurar, y responder a la confianza que el pueblo le otorgó, o ceder a sus impulsos revolucionarios, los que durante algunas ocasiones trataba de disimular y otras veces los exponía abiertamente, pero que siempre estaban presentes en él, más aún, cuando quiso satisfacer las exigencias de unos y otros. Las Fuerzas Armadas, los partidos y la totalidad de la sociedad miraron con alarma la oscilación permanente y los reajustes de Allende y sus ministros.

La crisis institucional chilena, agravada por los factores señalados anteriormente, tiene su explicación, siguiendo a Vial, en que Allende, en un momento determinado, descreo del respeto a la Constitución y, en cambio, ignorará la existencia de normas que se comprometió a respetar o, en su defecto, validar el empleo de estrategias ilegales (tomas de fábricas) que corroían la cada vez más débil e inestable base cívico-social chilena originada desde 1950 por una creciente polarización de los estamentos políticos chilenos, en la cual ningún sector político quiso ceder a su adversario algunas de las ventajas obtenidas en materia social y laboral. No había vuelta atrás, lo que, en buenas cuentas, equivalía a decir que, de una u otra manera, todos empujaban la “carga”, o la culpa en algunos casos, hacia el precipicio.

En “Itinerario de un fracaso”, que corresponde al capítulo IV del libro, Vial se concentra en destacar algunos de los rasgos más importantes que caracterizaron los tres años que duró su gobierno: 1971, dice, correspondió al año del triunfalismo; 1972, al año del desastre, y 1973, en tanto, al año del desenlace. Los tres años, por cierto, difieren sustancialmente entre sí, y presentan características propias, aunque están identificados con un gobierno que realizó una deficiente administración económica y financiera, por el cada vez mayor grado de ideologización y con una oposición gremial y financiera cada vez más sólida y decidida a entorpecer la gestión del mandatario. A partir de octubre de 1972, la delicada situación se agudiza y los “guevaristas”, aprovechando el descalabro económico y político del país, acentúan todavía más su discurso legitimado en la violencia que para entonces no conocía de límites o restricciones. Un nuevo actor social, las Fuerzas Armadas, hasta ahora alejado de la política inmediata durante la presidencia allendista, aparece en la escena local. La figura de Carlos Prats adquiere una relevancia cada vez más creciente, por el hecho de que paralelamente a sus funciones como Comandante en Jefe del Ejército desarrolló una carrera política de enorme gravitación pública, pues significaba que los militares, además de la labor realizada en cuarteles y regimientos, ahora reglamentaban las decisiones gubernamentales en el área social, legislativa y económica, adquiriendo por consiguiente una destacada participación en el devenir de los acontecimientos.

El que Prats haya desobedecido a sus autoridades y generara conflictos al interior de las Fuerzas Armadas, explica en buena medida el descontento de los militares de mandos medios, al percibir que la opinión de éstos no era tomada en consideración, lo que equivalía a decir que Prats no aceptaba consejos o sugerencias de sus subalternos. Mientras Prats les prohibía a éstos que se pronunciaran sobre cuestiones políticas de actualidad, el propio Comandante en Jefe se inmiscuía en asuntos de contingencia, violentando así una norma generalizada que él mismo había impuesto, pero que no respetaba. En consecuencia, Prats representó el ejemplo más preciso de cómo el gobierno de la Unidad Popular, a través de uno de sus funcionarios más importantes, el Ministro del Interior, vulneraba las leyes, al impedir dar curso a las órdenes de los tribunales de justicia de no expropiar las fábricas y de restituir propiedades agrícolas. En otras oportunidades, en cambio, cuando lo beneficiaba a él directamente o a sectores pro-allendistas, Prats se ceñía a las normas. Pese a la obsesión de éste por evitar la división de las Fuerzas Armadas, y la resultante guerra civil, su falta de perspectiva de Estado generó la pérdida de confianza y respeto, que se tradujo finalmente en la desobediencia, acrecentada por el temor de los militares de que el país se sumiera en una división que, para entonces, parecía no tener solución, al menos prescindiendo de la intervención del Ejército. Gran parte de los generales constitucionalistas, entre ellos Urbina, Pickering, Sepúlveda y Pinochet (que después

formaría parte de los “rebeldes”) preferían el estallido de una guerra civil, en vez de una desorganización que significaría el derrumbe de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad de la nación.

Pese a todo, desoyendo e ignorando a la oposición, Allende todavía disponía de algunas soluciones pacíficas y legales que le permitirían a su gobierno y a la Unidad Popular evitar una confrontación armada de la población. Pero el problema residía en que esta posición no era compartida por el Comité de la Unidad Popular, el cual, una vez más, dificultaba y entorpecía el desarrollo de los mecanismos que permitían todavía que Chile no se involucrara en un conflicto fratricida. La posibilidad de entenderse con el Partido Demócrata Cristiano, que representaba una de las tres soluciones que poseía Allende, para ese entonces resultaba prácticamente imposible de lograr. El plebiscito aparecía entonces como la alternativa más viable, quizá la única realmente posible, pero que, al igual que en las dos opciones anteriores, se encontró con la férrea oposición del Partido Socialista, del MAPU y de las otras fracciones “guevaristas”. Una vez más operó allí la ineficiencia y el entorpecimiento reiterado del Comité Central de la Unidad Popular, que obstruyó cualquier posible acercamiento entre ambas partes. Por el contrario, los socialistas no dieron su brazo a torcer y, de alguna manera, esperaban el desenlace de los hechos a su favor, esto es, que de una vez por todas se desatara la guerra civil que permitiría que el pueblo se alzara con las armas, aspiración que la izquierda radicalizada esperaba concretar desde hacía mucho tiempo.

Con la incorporación de las Fuerzas Armadas al gobierno en octubre de 1972, cuando Prats y otros dos miembros asumen como Ministros, el panorama cambiaría notoriamente. La creación del segundo gabinete militar, que comprende desde agosto de 1973 hasta 15 días antes del golpe militar, representa para Vial un “golpe seco”, o también llamado “blando” o “blanco” (lo que, en definitiva, equivalía a validar la intromisión de las FF.AA. en la institucionalidad política, aunque no de manera explícita), que era además el anhelo del demócrata-cristiano Patricio Aylwin Azócar, Presidente del Senado, quien desde hacía algunos meses había alentado a que las Fuerzas Armadas se incorporaran a la política gubernamental, con todas las implicancias que ello significaba. Esta opción fracasa, pero Allende insiste. El generalato rompe con Prats, excepto Urbina, Pickering y Sepúlveda. A estas alturas, el golpe ya estaba en marcha y contaba con el apoyo de la Armada y la Aviación, condicionando esta última su participación a que el Ejército también comprometiera su cooperación. Finalmente, después de angustiosos momentos de tensión, Prats renuncia a su cargo y Pinochet asume el 22 de agosto de 1973 como Comandante en Jefe del Ejército. De la trayectoria, pormenores y miembros involucrados en la conspiración golpista, Vial no se hace cargo en esta ocasión, materia que ha abordado en trabajos periodísticos recientes.

Los militares, dice Vial, pusieron término a la pequeña y gran crisis institucional que afectó al país, y lo sintetiza de esta manera: aquel hecho correspondió a la “fatalidad de lo inevitable” (p. 153); de un acontecimiento que se deseó, y hasta se buscó con desesperación, pero que, por diferentes motivos, no se hizo público, arguyendo para ello razones supuestamente legalistas o constitucionalistas propias del Estado chileno y de la institucionalidad jurídica que lo compone. Al igual que muchos otros ciudadanos, Vial justificó, apoyó y legitimó el golpe militar durante el transcurso de los hechos, y posteriormente también. Es categórico en afirmar que Pinochet no tuvo ninguna relación con los preparativos de los anticonstitucionalistas, pues carecía de cualquier conocimiento de una posible conspiración al interior de las Fuerzas Armadas. Asimismo, Vial tampoco se

pronuncia sobre si esta conspiración militar fue adecuada o inapropiada; solo se limita a señalar la función que desempeñaron los militares, considerando que el fraccionamiento en su interior provocaría la guerra civil, y de esta manera sería más vulnerable a un posible ataque del Ejército peruano o argentino, anunciando por lo tanto la ruina absoluta de Chile. Pese a los esfuerzos desplegados por las Fuerzas Armadas, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional para evitar derramamiento de sangre y la muerte de personas inocentes, finalmente ocurrió el levantamiento castrense, considerado por algunos como una traición de los militares, entre ellos Pinochet, hacia Allende, quien había depositado su confianza en ellos. Del desenlace, la tortura y los fusilamientos cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas contra prisioneros políticos, en esta oportunidad, Vial no se hace cargo. Así tampoco emite un juicio moral sobre el suicidio de Allende, pues no son ámbitos que conciernen, según él, directamente al tema de esta investigación, aunque si tienen relación por cuanto el que analiza lo ocurrido y la manera cómo se aborda esta materia, es considerado un historiador “conservador” y de derecha. Y además es el autor (o compilador) del *Libro blanco de la Junta Militar*, en el cual se exponen y justifican los hechos de violencia política de Estado cometidos durante el régimen presidencial del general Augusto Pinochet Ugarte.

Una lectura atenta y detenida del texto permitirá detectar elementos de juicio que, aunque no se presenten explícitamente, contienen resabios ideológicos de un abogado que desde la escritura periodística de contingencia realizó una férrea oposición a la Unidad Popular, y que después del golpe militar de septiembre de 1973, ahora como un estudioso de la historia, interroga y enjuicia a los mismos a quienes antes criticaba en sus columnas de opinión o en artículos y reportajes. En este libro, en cambio, que en propiedad corresponde a una compilación de conferencias pronunciadas por su autor en la Universidad Finis Terrae, Vial opta por moderar el análisis crítico sobre Allende y su gobierno, cuestión que podría responder a una serenidad académica propia de la decantación de ideas y pasiones que otorga el paso de los años. Si antes, durante los primeros años de la década de 1970, primaba la virulencia y el ataque sin cortapisas, ahora, por el contrario, el historiador Vial ha morigerado su postura sobre el tema. Aunque, en rigor, en su calidad de Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Finis Terrae, Vial continúa lanzando sus diatribas para criticar la manera cómo la Concertación y el gobierno de Ricardo Lagos E., específicamente, han abordado el tema de la enseñanza y la pedagogía, que hoy por hoy constituyen sus principales preocupaciones académicas e intelectuales.

SANTIAGO ARÁNGUIZ PINTO  
Universidad Diego Portales